

## I

El proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo de la Productividad en España, responde a una recomendación a los Estados Miembros de la zona euro hecha en 2016 por el Consejo de la Unión Europea, con base en el artículo 292, en relación con el artículo 121, apartado 2, y su artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de identificar o crear consejos nacionales de productividad que pudieran encargarse específicamente de analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad, con el objetivo de fomentar la aplicación de reformas a nivel nacional que incidan positivamente en la productividad y, por consiguiente, en el crecimiento económico y convergencia en el seno de la Zona euro.

El citado proyecto de Real Decreto consta de doce artículos y tres disposiciones finales. Debiéndose llamar la atención en este punto sobre la existencia de una discordancia entre la MAIN y el texto aportado, pues siendo su contenido el de 12 artículos y 3 disposiciones finales, se indica en el apartado 3 de la MAIN ser su contenido de 10 artículos, si bien luego se desarrolla referencia a 12 artículos, sin indicar el contenido de este último, relativo a personas colaboradoras y expertas especialistas economistas en el ámbito de la productividad, por lo que se recomienda revisar la redacción de este apartado de la MAIN.

El indicado proyecto de Real Decreto responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 129.

En la tramitación de la referida norma proyectada se ha prescindido del trámite de consulta pública, ya que se trata de una norma organizativa que carece de un impacto significativo en la actividad económica y no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, de conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, si bien sí ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública.

## II

Entrando al análisis de su contenido desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal (en adelante DP) procede comenzar indicando que los DP constituyen la materia prima de la sociedad de la información, algunos autores los califican como el petróleo de la economía digital, de manera que difícilmente los servicios públicos y la sociedad del bienestar o las empresas podrán funcionar actualmente de una manera adecuada sin ellos.

Dado su reconocimiento como un derecho fundamental, estos DP (que son en realidad cualquier dato o información de una persona física identificada o identificable) no pueden utilizarse sin más, sino que deben respetarse unas reglas sobre su utilización, las cuales indican cuando y como pueden ser tratados.

En el ámbito internacional, las primeras iniciativas surgieron en el marco del Consejo de Europa, así la Resolución 1968 sentó las bases de unos principios que regulaban el tratamiento de la información de DP. A partir de entonces se ha ido sucediendo la producción de normas en los ámbitos internacional, europeo, nacional y autonómico. En este contexto las principales normas, a día de hoy son, en síntesis:

1. Reglamento general de protección de DP UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo, 27 de abril de 2016.
2. Directiva 2016/680, relativa al tratamiento para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales.

3. LO 3/1018, de 5 de diciembre, de protección de DP y garantías de los derechos digitales, y que sustituye a la anterior LOPDCP de 1999, esta LO adapta al marco español el Reglamento europeo y desarrolla algunos de sus aspectos.

Las citadas normas establecen el marco normativo básico en materia de protección de datos que luego se podrá concretar en cada sector específico.

El proyecto normativo objeto de este informe atribuye al Consejo de la Productividad la planificación y elaboración de los ejes de actuación para dar cumplimiento a las funciones atribuidas en el artículo 8 y, en concreto, para la elaboración de análisis económicos y estadísticos orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española, así como de las políticas públicas con impacto en estas dimensiones incluyendo las implicaciones distributivas de la misma para la emisión de opiniones en materia de política económica y para la solicitud de informes a expertos independientes. Asimismo, corresponde al Consejo la aprobación del informe anual del Consejo Nacional de la Productividad previsto en el artículo 10.

Siendo estas sus funciones cabe destacar la previsión contenida en el **apartado 6 del artículo 9 sobre acceso a la información y deber de colaboración**, el cual dispone lo siguiente: *“Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales”*.

Por la tanto, en la medida en que la propia norma estipula que cualquier tratamiento de datos de carácter personal de las personas físicas a realizar por el citado Consejo estará sujeto a la normativa de protección de datos quedaría con ello y con carácter general salvaguardada la previsión del respeto a dicha normativa, respeto que habría de ser garantizado en cada caso con las

medidas adecuadas y necesarias según los tratamientos que fueran a llevarse a cabo.

### III

En tal sentido, la anterior observación debe entenderse hecha sin perjuicio de recordar que para poder tratar los datos personales es preciso que exista una base legal, esto es, una razón que lo justifique. La previsión del citado artículo 9.6 de la norma proyectada constituye una medida adecuada de salvaguarda del debido respeto a la normativa en materia de protección de datos con carácter general o genérico pero no serviría por sí sola como título habilitante para realizar un tratamiento de datos de carácter personal.

A este respecto, el artículo 6 RGPD enumera cuáles son los supuestos que permiten tratar los datos, de modo que, si no se da una de las circunstancias previstas en dicho precepto, no se pueden tratar los datos personales. En síntesis, según dispone el artículo 6.1 RGPD, *«el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones [...]»*:

- 1) *el «consentimiento» del interesado;*
- 2) *«la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte»;*
- 3) *el «cumplimiento de una obligación legal»;*
- 4) *«proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física»;*
- 5) *el «cumplimiento de una misión realizada en interés público/ejercicio de poderes públicos»;*
- 6) *«la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero».*

Sin la concurrencia de alguno de los supuestos ut supra enumerados no es posible llevar a cabo un tratamiento; sin perjuicio de lo cual, el hecho que concorra uno de estos supuestos es necesario, aunque no suficiente, dado que para tratar los datos personales es necesario, además, que se cumpla siempre con los principios de protección de datos previstos en el art. 5 RGPD.

Por lo tanto, para poder tratar los datos, es necesario cumplir con el artículo 5 y con el artículo 6 RGPD. Así lo tiene establecido el TJUE, entre

otras, en su sentencia de 24 de noviembre de 2011, en el caso ASNEF (C-468/10 y C-469/10). Y así lo ha reiterado recientemente en su sentencia C-61/22, de 21 de marzo de 2024, en sus apartados 70, 75 y 76 sobre la existencia de una limitación y sobre la justificación de la limitación respectivamente:

*“El artículo 7 de la Carta establece, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. En cuanto a su artículo 8, apartado 1, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Interpretadas conjuntamente, de estas disposiciones se infiere que, en principio, cualquier tratamiento de datos personales por parte de un tercero puede constituir una vulneración de tales derechos (sentencia de 17 de octubre de 2013, Schwarz, C-291/12, EU:C:2013:670, apartado 25)”.*

*Como resulta de reiterada jurisprudencia, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos de carácter personal, respectivamente garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta, no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse de acuerdo con su función en la sociedad (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2022, SpaceNet y Telekom Deutschland, C-793/19 y C-794/19, EU:C:2022:702, apartado 63).*

*Por lo tanto, pueden introducirse limitaciones a estos derechos, siempre que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta, sean establecidas por la ley y respeten el contenido esencial de dichos derechos. Además, según la segunda frase de ese apartado, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse tales limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. A este respecto, el artículo 8, apartado 2, de la Carta precisa que los datos personales deben tratarse, en particular,*

*«para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley».*